

Paramilitares, Fuerza Pública y periferias amenazantes

Silenciar la democracia. Las masacres de Remedios y Segovia 1982-1997

Grupo de Memoria Histórica, Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Fundación Semana, Taurus, Pensamiento, Bogotá, 2010, 352 págs.

“RECORDAR EN medio de la guerra tiene mucho de desafío” es una de las primeras frases del libro y una constatación para las personas que buscan hacer memoria en Colombia. Esta publicación, pensada para ser un informe del Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, logra ser un documento de denuncia respaldado por un serio trabajo de investigación. En este sentido, considero que el equipo que lo concibió enfrentó, acertadamente, el reto de hacer memoria a pesar de que el conflicto armado no haya cesado, llamando la atención, además, sobre aspectos que suelen ser evitados como la responsabilidad de la Fuerza Pública (militares vinculados al Batallón Bomboná, en este caso) y de caciques políticos “tradicionales” (como César Pérez García en esta situación) en centenas de crímenes y en lo que el título retrata de forma idónea: el silenciamiento de la democracia.

El estudio explora varios procesos relacionados con cuatro masacres cometidas en los municipios de Remedios y Segovia (Antioquia): la masacre –o recorrido de muerte– ocurrida en las veredas Cañaveral y Manila de Remedios, en 1983, con un saldo de veinte personas asesinadas; la masacre de cuarenta y seis personas del 11 de noviembre de 1988 en Segovia y La Cruzada; la masacre de La Paz y El Tigrito en Segovia perpetrada el 22 de abril de 1996, cuando catorce personas fueron acribilladas –dos continúan desaparecidas–, y la masacre de siete personas en Remedios, perpetrada el 2 de agosto de 1997. Queda claro, a partir de las exposiciones contenidas en los cinco capítulos, que los agentes de la Fuerza Pública son responsables de la reiterada y violenta negación de un debate social

democrático por medio de una cadena de eventos correspondientes, a su vez, a un esquema de “guerra sucia”. Al respecto, es importante notar que de los trescientos cuarenta y siete civiles asesinados en estos municipios entre 1982 y 1997, uno de cada tres era portador de una identidad social y política de izquierda. En suma, con las dos primeras masacres se dio el aniquilamiento local del Movimiento Obrero Independiente Revolucionario (MOIR); con la tercera se inició el exterminio de la Unión Patriótica (UP) y con las dos últimas se culminó la extinción de las Juntas Cívicas, del Comité de Derechos Humanos de Remedios y Segovia, y de lo que restaba de la UP en la región.

No pretendo destacar hechos específicos de los eventos escrutados, o sea, las cuatro masacres –de las veinticuatro cometidas en Remedios y Segovia desde 1982 hasta el presente–. Esa es una experiencia que le compete evaluar al lector, pues a pesar de la tendencia a la exaltación del horror implícita, hay elementos en la narrativa y en el análisis que podrían despertar la adormecida capacidad de reflexión política autónoma de muchos colombianos. Destaco, por ejemplo, la forma como es hilvanada (con el respaldo de un uso adecuado de las fuentes) la cuestión del estigma de las víctimas de la izquierda, convertido en generador de nuevas victimizaciones, y el asunto de la desactivación tanto de las redes de los movimientos sociales como del principio de solidaridad que las orienta.

En esta misma dirección, rescato el comentario de Gonzalo Sánchez, en el prólogo, cuando se pregunta por “las estructuras mentales y los procesos de ideologización” dentro de las propias Fuerzas Armadas del Estado que han perpetuado una representación de los adversarios que justifica el horror en aras de la restauración del orden. Esa es una indagación que, sin sombra de duda, debería guiar la reconstrucción de las memorias del conflicto, sobre todo porque el énfasis en tal aseveración no está en los hechos sino en procesos ideológicos de larga duración. Ese es un aspecto que informa acerca de los mecanismos de reproducción de una violencia que se ha constituido en matriz de las relaciones sociales. En mi visión, a ese punto hemos llegado en

Colombia. Por esa razón, la reconstrucción de memorias en aras del establecimiento de nuevos pactos sociales, que contemplen otras vías de reconciliación, debería apuntar hacia el análisis de tales procesos ideológicos y no solo enfocar aspectos coyunturales.

Los autores señalan que el desinterés de las “élites regionales” en el alto nordeste antioqueño condujo al avance guerrillero, lo cual, en consecuencia, propició macabras alianzas paramilitares o, mejor, la incorporación de acciones paramilitares en el repertorio de la Fuerza Pública, con todo el derramamiento de sangre subsecuente en el periodo analizado. Esta exégesis no parece novedosa respecto a lo que ya se ha dicho sobre el conflicto armado en Colombia. Lo que sí es novedoso y abre un camino para otras interpretaciones es la idea de que la desarticulación de regiones consideradas “periféricas” favoreció una perversa autonomía de la Fuerza Pública, reflejada en la desinstitucionalización de las estrategias contrainsurgentes. Más allá de eso, estaríamos hablando de la desregulación de las competencias dentro del propio Estado, tal como indican los autores. Esto significa que el poder militar asumió el trámite de las demandas de la población civil, pero “cuando la población civil más reclamaba la presencia del Estado para afrontar la escasez de bienes públicos, lo encontrara en su dimensión meramente represiva y no en su función reguladora y ordenadora” [pág. 174]. La profundización en el análisis de las tensiones entre el poder civil y el poder militar, palpables durante el gobierno de Belisario Betancur Cuartas (1982-1986) –por ejemplo– cuando fueron perpetradas dos de las cuatro masacres analizadas, es de gran valía en la medida en que permite ilustrar cómo la exacerbación de tales disputas en el centro, “se resolvía violentamente en la periferia” [pág. 174].

Ha sido mi empeño en esta reseña destacar algunas de las ideas que considero más intrigantes para tratar de estimular la lectura del informe completo en mis lectores, pero sin tener que seducir regresando al escenario del horror. Los autores plantean que el grupo Muerte a Revolucionarios del Nordeste (MRN) no fue un ejército privado asentado territorialmente que respondiera a un proyecto contrainsurgente al

mando de Fidel Castaño. Para ellos, el MRN, responsable por las masacres de los años ochenta en esta región del país, operó como una red criminal funcional y coyuntural, al igual que los grupos Muerte a Secuestradores y Dignidad Antioqueña. Esta interpretación es importante porque revela que hasta 1997, las acciones que acallaron la protesta popular y los movimientos sociales en el nordeste de Antioquia fueron fruto de acciones militares encubiertas que, a su vez, fueron presentadas como acciones paramilitares. Lo anterior pone el foco en el propio Estado y sus contradicciones; cabe aquí, incluso, mencionar que para los autores la descentralización administrativa fue un elemento que contribuyó a la desarticulación de la movilización nacional.

De todas maneras, considero que es necesario ahondar en los hilos de continuidad entre las etiquetas de los grupos que se adjudicaron los hechos de violencia para demostrar y evidenciar las trayectorias de las alianzas y especificar los responsables que permitieron, a partir de finales de los años noventa, la consolidación de fuerzas expedicionarias confederadas en el ámbito nacional. Como consta en el texto, el Grupo de Autodefensas del Nordeste, ya en la masacre de 1997, contaba con bases propias en los barrios La Paz y José Antonio Galán de Segovia y sus miembros solían presentarse como Ejército.

Otra idea interesante plasmada en el libro tiene que ver con algunos efectos de la directriz de la combinación de todas las formas de lucha de las guerrillas, pues muchas acciones militares entraron en contradicción con las acciones políticas. La Operación Segovia de las Farc, por ejemplo, propició asesinatos de miembros de redes clientelares. Esto ocurrió de forma concomitante con purgas internas entre las propias milicias urbanas de las Farc y del ELN en los años noventa. A la postre, estas dinámicas terminaron por reforzar la percepción del vínculo entre la izquierda social y política y la guerrilla, lo que justificó, desde la perspectiva de los perpetradores, los ataques intestinos contra estos sectores. El periodo seleccionado, dígame de paso, ilustra lo que los autores describen como los tortuosos tránsitos de la resistencia popular, entre aperturas democráticas y cierres autoritarios. Las masacres son hitos de

esas transformaciones y evidencian que el Estado, en la versión militarista que le ha correspondido a “periferias amenazantes” como el nordeste antioqueño, Urabá y el Magdalena medio, termina por delegar los conflictos sociales en los actores armados como una forma de cortar procesos democráticos autónomos.

Silvia Monroy Álvarez

Antropóloga, doctora en Antropología Social,
Universidade de Brasília (UnB)